

8. Construcción física y simbólica del territorio de la resistencia-rebelde frente a la exclusión y la contrainsurgencia



NORMA ANGÉLICA RICO MONTROYA*

DOI: <https://doi.org/10.52501/cc.333.08>

Resumen

La comprensión del contexto global, la educación autónoma y formación política de sus militantes ha permitido a los pueblos zapatistas promover entre sus bases el relevo generacional, reconocer sus recursos políticos, psicosociales y culturales para administrar sus territorios, así como movilizar nuevas formas de afrontamiento frente a la guerra. La noción de “resistencia-rebelde” surge del reconocimiento de la organización comunitaria y resistencia zapatista activa/creativa de los pueblos frente a la colonización, las políticas neoliberales y las políticas de contrainsurgencia del Estado mexicano. A partir del trabajo etnográfico, los relatos biográficos y ejercicios de memoria con las bases de apoyo se revisa la autonomía, las prácticas de resistencia y re-existencia políticas, sociales, educativas y culturales, que además de fortalecer las subjetividades resilientes construyen un entramado de relaciones comunales que van del espacio público al privado, de la subjetividad e identidad a la construcción de un sujeto colectivo que habita y construye un territorio de paz y rebeldía.

Palabras clave: *zapatismo, territorio, resistencia, subjetividad, autonomía.*

* Doctora en Investigación Educativa. Profesora-investigadora en el Centro de Investigación y Posgrado de Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-2615> ; correo electrónico: angelica.rico@rcastellanos.cdmx.gob.mx

Introducción

Desde 1994, los y las zapatistas han resistido a la colonización y a la guerra integral de desgaste implementada por el Estado mexicano, con la construcción de la autonomía *de facto*, que incluye el control de territorio y la administración de sus recursos naturales. En la “Primera Declaración de la Selva Lacandona” (EZLN, 1994a) el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la guerra al gobierno federal y sus formas de exclusión, exigiendo el cumplimiento de 11 demandas básicas y la revocación a la reforma constitucional del artículo 27 (1992), en la que se permitía la venta de la tierra ejidal y comunal. Esta reforma, para los pueblos indígenas que conformaban el EZLN, representaba el final del reparto agrario, que seguía siendo una lucha vigente en Chiapas, así como la cancelación de todas las conquistas sociales y colectivas enarboladas por Emiliano Zapata en la Revolución mexicana.

La reforma del artículo 27 constitucional, contrario a lo esperado por el gobierno federal, revitalizó la lucha campesina por “tierra y libertad” en muchos estados, dando pie a reivindicaciones no solo económicas sino de orden cultural e identitario indígena por la defensa de derechos colectivos, como la libre determinación, la autonomía y la administración de su territorio. Tal como ocurrió con el movimiento indígena zapatista, cuyos principios ideológicos, como el mandar obedeciendo, el para todos todo y “aquí el pueblo manda y el gobierno obedece”, responden a valores propios de la cosmovisión indígena, basados en la reciprocidad, el consenso en asamblea y, sobre todo, la relación hombre-mujer-naturaleza. Estos planteamientos constituyen en sí un proceso descolonizador y de rebeldía, ante la noción liberal y utilitarista de la tierra. Bajo esta lógica, es entendible que una de las primeras órdenes de la Comandancia General del EZLN fuera impedir el saqueo de las riquezas naturales de los territorios liberados y convocar a las comunidades a organizarse en asambleas. En este capítulo se abordan algunas líneas de investigación que permiten entender históricamente la importancia del territorio en el conflicto político-militar en Chiapas. A través de un trabajo documental y etnográfico de largo aliento, se analiza la construcción del territorio autónomo zapatista utilizando dispositivos como

la observación participante, entrevistas semidirigidas, historias de vida y charlas documentadas en diferentes momentos de la organización, tales como la organización clandestina en la década de los ochenta, el levantamiento armado de 1994 y posteriormente la lucha organizativa y territorial de las bases de apoyo y la comandancia política frente a la contrainsurgencia en el siglo XXI. Este capítulo está conformado por seis apartados: el primero es sobre la colonialidad, la violencia y la resistencia campesina; el segundo aborda teóricamente la encrucijada entre poder y resistencia; en el tercero se centra la atención en la resistencia como categoría social situada; en el cuarto se pasa de la noción “madre tierra” a la construcción del paisaje y el territorio autónomo rebelde, y en los dos últimos focalizamos la atención en la violencia política experimentada por las bases y sus formas de resistencia.

Colonialidad, violencia y resistencia campesina

Para comprender el proceso de neocolonización global en las comunidades indígenas de Chiapas es importante considerar la pobreza, exclusión, racismo y colonización en la que sobrevivió la población indígena durante la Colonia, pero más recientemente en el lapso histórico denominado “Sistema de fincas”¹ (siglos XVIII-XIX), modelo de producción de corte colonial (Toledo, 2002; Rus, 2012) que marcó la subjetividad de los abuelos/as mayas, pero que también incide en la de sus hijos y nietos. La colonialidad construye, desde el poder, una mirada hegemónica que excluye, discrimina e invisibiliza la diferencia desde diferentes ámbitos. Si la colonialidad del poder (Quijano, 2007) refiere a la interrelación entre formas modernas de explotación y dominación, y la colonialidad del saber tiene que ver con las formas de acceder al conocimiento y con el rol de la epistemología, la colonialidad del ser implica, entonces, la experiencia vivida de la colonización (Maldonado-Torres, 2007).

¹ Por mencionar algunos aspectos concretos de las relaciones sociales en esta época está la “cultura de finca” (Toledo, 2002), la figura del “peón acasillado” y el concepto de “baldío” (obligación de trabajo semicoercitivo de los indígenas) (Jan Rus, 2012).

En el caso indígena, el sistema neoliberal ha utilizado diversas estrategias económicas y políticas para contener a los movimientos étnicos en Chiapas, una de estas fue la política gubernamental de tolerancia al flujo migratorio interno hacia la frontera agrícola de la Selva Lacandona en la década de 1950 (Leyva y Ascencio, 1996). Esa migración sirvió de válvula de escape para las presiones indígenas-campesinas, por lo menos hasta que sus condiciones se agudizaron con la implementación de políticas neoliberales en 1980 y la expulsión de los campesinos por terratenientes y militares que querían apropiarse de tierras colonizadas y cultivables.

La violencia contra los pueblos indígenas ha sido legitimada históricamente por la expansión colonial y el exterminio de grandes sectores de la población. Por recursos naturales y minerales, “la actitud imperial promueve una actitud fundamentalmente genocida con respecto a sujetos colonizados y racializados, considerados dispensables” (Maldonado-Torres, 2007, p. 140). Las políticas educativas que buscaban “asimilar lo indígena” y los discursos en torno a la interculturalidad funcional fueron otra forma de políticas intervencionistas y represivas en contra de los pueblos originarios. Convirtiéndose el racismo, la deshumanización y subordinación de los pueblos, sus territorios, conocimientos y prácticas cotidianas, en una especie de colonización de la vida.

Durante el levantamiento armado de 1994, el Estado continuó con la violencia y represión, sin embargo, ante la organización local zapatista, la inteligencia militar mexicana comprendió que una guerra convencional podría causar más daños ecológicos en la Selva Lacandona que bajas en el EZLN, por lo que se optó por la contrainsurgencia para contener al movimiento. En dicha estrategia no se busca la eliminación física del EZLN sino desmoralizar a sus combatientes, aislarlos de sus bases de apoyo y simpatizantes hasta que se dejen de considerar como una alternativa posible, bajo la lógica de “quitarle el agua al pez” (Rico, 1997). La guerra se convierte entonces en un auténtico instrumento político y de disputa territorial, mientras para el Ejército federal la contrainsurgencia es una guerra de baja intensidad (GBI), por el uso mínimo de la fuerza militar directa, para los zapatistas es una guerra integral de desgaste que busca acabar con la resistencia de las bases de apoyo y la voluntad de luchar de los insurgentes (Hidalgo, 2006). Es así como los ataques de grupos paramilitares, los des-

plazamientos, sobrevuelos, detenciones y la militarización de la vida cotidiana contribuyeron a la omnipresencia del control y de la amenaza represiva, propiciando un ambiente de inseguridad permanente.

Los mecanismos propagandísticos y psicológicos de la contrainsurgencia no solo mantenían mal informada a la opinión pública, sino que escondían las fuerzas que estaban detrás de la violencia, presentándola como conflictos intercomunitarios, religiosos o territoriales con la finalidad de que las fuerzas de seguridad obtuvieran el apoyo social para intervenir. En cierto sentido se buscaba una internalización de la opresión, una continuación de las pautas históricas del colonialismo.

“Para que los dominados experimenten la situación de subordinación y permanezcan en ella, es necesaria la producción de modos de objetivación que argumenten y legitimen [...] y modos de subjetivación que ‘naturalicen’ su posición social desventajosa” (Fernández, 2008, p. 54). Estos sentidos suelen ser enunciados mediante dispositivos de saber-poder y prácticas institucionales, “el colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, con vaciar el cerebro colonizado de toda forma y de todo contenido. Por una especie de perversión de la lógica se orienta hacia el pasado, lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila. Desdibuja la historia” (Walsh, 2006, p. 21).

En Chiapas, la contrainsurgencia no solo ha buscado destruir la historia sino la posibilidad de futuro, por lo que ha tomado por blanco a niños y mujeres haciendo uso de estrategias que van encaminadas a suprimir a las siguientes generaciones de posibles adversarios (Rico, 2007). Sin embargo, a pesar de la estrategia de contrainsurgencia iniciada en 1995 por el Estado, los y las zapatistas no solo han resistido, sino construido procesos político-pedagógicos y ontológicos para descolonizar a sus pueblos a través de la organización comunitaria.

Resistencia vs. poder

La categoría de resistencia nos ubica en al menos dos cruces: poder-ideología y poder-cultura. El poder puede ser concebido como dominación, control y coerción, pero también como expresión de lucha, resistencia y

re-afirmación del sujeto (Foucault, 1999). Por consiguiente, un movimiento en resistencia como el zapatista se sitúa en el campo de una lucha ideológica, política y económica por controlar los recursos naturales de su territorio, pero también los términos culturales sobre los cuales el mundo es definido, ordenado y legitimado.

Toda relación de poder, al ser relacional y situada, conlleva en sí la rebeldía de los sujetos, la obstinación de la voluntad que se niega a ser modelada. “A esta obstinación Foucault la denomina resistencia; la cual puede ser consciente o inconsciente, activa enfrentando el poder o, bien, pasiva para intentar salirse del juego; también puede ser solitaria, organizada o espontánea” (García, 2002, p. 38). Aunque hay diversas formas de resistencia, en este capítulo se centra la atención en la resistencia que el sujeto realiza de manera consciente frente a la exclusión y violencia de Estado, es decir, la que tiene como base la motivación política. Siguiendo a Maldonado (2002), “la resistencia existe porque en su ser incuba la liberación, de no ser así, no sería resistencia, sino supervivencia” (p. 218).

Aunque en ciertas situaciones los pueblos zapatistas han tenido que reaccionar de manera defensiva, el proceso histórico de violencia que han experimentado los ha obligado a construir estrategias de resistencia activa frontales e indirectas. Una resistencia indirecta, por ejemplo, puede ser el mandar obedeciendo, principio filosófico indígena que rechaza el concepto de “poder-sobre” para reemplazarlo por el poder horizontal. En vez de disputar por vía de la violencia el poder coercitivo del Estado, esta resistencia indirecta cuestiona su legitimidad, a través del biopoder, construyendo relaciones comunitarias y prácticas que fortalecen el tejido social, ganando “poder” en la medida en que sus espacios autónomos y sistemas normativos son funcionales.

La resistencia y el territorio zapatista

A partir del trabajo etnográfico con enfoque colaborativo por más de 25 años, se ha podido analizar la contrainsurgencia en ámbitos cotidianos, sus efectos en la población civil, así como las prácticas de resistencia y reexistencia para la construcción de su autonomía.

Se optó por nombrar resistencia-rebelde a la resistencia de las familias y comunidades zapatistas de Chiapas, debido a que más que una estrategia defensiva, mecánica o inconsciente frente a la dominación política y económica del Estado, esta evoca a una oposición activa y de construcción creativa consciente de niños/as, hombres y mujeres frente a la guerra que les ha permitido sobrevivir incluso cuando ha estado en peligro su propia existencia.

La conciencia colectiva y la motivación de los militantes conlleva un proceso de subjetivación en el que los sujetos pasan de la subalternidad al antagonismo, elaborando una “subcultura de subalternidad, es decir, un código colectivo en el cual las estrategias ante la dominación y la explotación son compartidas, representadas e ideologizadas en forma de una conciencia de clase compartida, una ideología subalterna contrahegemónica” (Scott, 2000, p. 320).

Para comprender la resistencia-rebelde zapatista en Chiapas más que entenderla como un proceso comunicativo tal como lo propone Scott (2000), se analiza como un proceso político-pedagógico de largo aliento, que se configura y recrea colectivamente en el aula, la familia, comunidad y en todos los espacios autónomos. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se convierten así en espacios pedagógicos que promueven la capacidad de los sujetos de incidir en los diversos procesos reflexivos, de construcción social y transformación de la realidad, que les permiten cubrir sus necesidades, a la vez de compartir un proyecto político común. La resistencia-rebelde de los y las zapatistas constituye una respuesta y un aprendizaje construido a través de décadas de experimentar el racismo, la exclusión, la colonialidad, y es transmitido, recreado y configurado por las nuevas generaciones a través de la oralidad, las prácticas rebeldes y la memoria colectiva. En algunas ocasiones esta resistencia indígena parece confrontar directamente al Estado-gobierno, tal como ocurrió durante el “levantamiento armado”, pero en otras suele ponerse a la defensiva, como sucedió desde 1995, cuando el ejército se posicionó territorialmente en los pueblos liberados, militarizando y paramilitarizando la zona.

Es así que la resistencia-rebelde constituye una intrincada red de estrategias que se expresa no solo en el campo político sino en un amplio espacio en la cultura y en la vida cotidiana:

1. Resistencia cultural: rescatando a través de la educación autónoma su lengua, cultura, prácticas culturales, fiestas y tradiciones y reconfigurándolas con los valores rebeldes. 2. Resistencia política: negociar con el gobierno federal, buscando legalmente el reconocimiento de los derechos colectivos y de sus autogobiernos. 3. Resistencia económica: la producción y venta de sus productos agropecuarios y artesanales a través de cooperativas y mercados solidarios, resistiendo a un mercado global que los subsume. 4. Resistencia social: se realizan proyectos propios de salud y productivos autónomos, que permiten solucionar ciertas demandas básicas de las comunidades, sin aceptar ningún proyecto oficial de corte asistencialista, ni dinero que los lleve a la dependencia con el Estado. [Rico, 2018, p. 17])

Dichas estrategias no hubieran sido posibles sin un componente territorial de por medio. Las autoridades y bases de apoyo zapatista han administrado sabiamente su capital y recursos humanos, ambientales, geográficos y simbólicos, resignificando sus prácticas organizativas y sociales para resistir.

De la “madre tierra” a la construcción de un territorio autónomo rebelde

La noción de territorio, con la apropiación física-simbólica de este, ha jugado un papel trascendental en la guerra que se libra en Chiapas, mientras para el EZLN, la madre tierra es base fundamental de su ser indígena y de su lucha por la autonomía local, para el gobierno federal la Selva Lacandona representa un espacio geoestratégico para concretar las políticas neoliberales y proyectos extractivistas en la región, motivo por el que la disputa por la tierra se ha convertido en eje transversal de los objetivos de la contrainsurgencia, descritos en el “Plan Chiapas 1994” (CDDH Fray Bartolomé de la Casas, 2022). Las confrontaciones político-militares, las muertes selectivas y desplazamientos forzados de la zona provocados por la militarización, los ataques paramilitares y el narcotráfico, en realidad tienen como principal objetivo el desplazamiento de la población, como ocurre en otros países latinoamericanos, de África y Oriente medio. Tal como explica Mon-

dragón (2007) en sus análisis sobre la guerra en Colombia, “no hay desplazamiento porque hay guerra; hay guerra para que haya desplazamiento” (citado por Rozental, 2014, p. 174). Para comprender esta situación, a continuación se hará una breve revisión histórica-territorial de las estrategias contrainsurgentes que se han implementado en Chiapas.

La rebelión zapatista que inició con el levantamiento armado el 1 de enero de 1994 no solo fue en contra de la explotación económica del capitalismo neoliberal en forma del TLCAN,² sino ante sus formas colonizadoras de pensamiento, desde las cuales “lo indígena”, su cultura y cosmovisión han sido desplazadas, racializadas y deshumanizadas. Frente a la caída del socialismo real y el llamado “fin de la historia”, el movimiento indígena zapatista interpeló el paradigma de desarrollo de Occidente, apelando a la reivindicación de su cultura, identidad y defensa de su territorio.

El levantamiento armado en un primer momento causó incredulidad, sorpresa, e incluso provocó la negación del gobierno federal y del grueso de la población, que no concebía que en el país pudiera haber guerra, sobre todo con el inicio del TLCAN, el cual representaba para México el ingreso al primer mundo. En el primer discurso oficial del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, además de ofrecer públicamente el “perdón a los alzados”, describió al EZLN como “un puñado de indígenas guatemaltecos dirigidos por un extranjero”. No solo no se quería reconocer la composición indígena y mexicana del ejército rebelde, sino que el discurso evidenciaba el componente racista propio del Estado mexicano hacia todo lo indígena. Suponer que un hombre blanco, muy seguramente extranjero, manipulaba indios ignorantes con fines políticos y electorales, expresaba evidentemente el discurso colonial mexicano que ha guiado la relación del Estado con los pueblos originarios históricamente.

Siguiendo a Scott (2000), los que detentan el poder suelen nombrar “a los rebeldes o revolucionarios bandidos, criminales, delincuentes, con el fin de desviar la atención de sus exigencias políticas” (p. 81), motivo por el que es entendible que desde los medios de comunicación masiva se le llamara al EZLN transgresores de la ley. Sin embargo, la realidad sobrepasó el asombro,

² Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por Canadá, México y Estados Unidos que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y que en este año está siendo discutido por los tres países para revisar su viabilidad.

la respuesta de apoyo y solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional a las demandas zapatistas no se hicieron esperar. El impacto que puede tener la primera declaración pública del discurso oculto, según Scott (2000), solo puede entenderse por el prestigio que le da el hecho de atreverse a dar voz y consistencia a un discurso, hasta ese momento ampliamente compartido por la mayoría, pero que ha sido contenido.

El EZLN fue considerado la primera guerrilla del siglo XXI, por su distanciamiento táctico con las guerrillas de los años setenta y ochenta de México y Centroamérica, no solo a nivel militar sino político y discursivo, difundido ampliamente a través de internet. El rompimiento radical con las guerrillas de décadas anteriores, con el discurso de la izquierda tradicional y la incorporación de la “Ley revolucionaria de mujeres” a sus demandas, hizo del movimiento indígena zapatista el primer movimiento clara y orgánicamente antisistémico, puesto que no solo se oponía al TLCAN, o al capitalismo neoliberal, sino que, desde sus planteamientos ideológicos, sus acciones y otras formas de hacer política, se vislumbraba un nuevo proyecto civilizador indígena. “De pronto la revolución se transforma en algo esencialmente moral, ético. Más que el reparto de la riqueza o la explotación de los medios de producción, la revolución comienza a ser la posibilidad de que el ser humano tenga un espacio de dignidad” (Dussel, 2007, p. 502).

En contraste con la estructura verticalista de las organizaciones y partidos de “vanguardia” o de las guerrillas que buscaban tomar el poder por la vía armada, el EZLN se inscribe en los movimientos que apuntan hacia la horizontalidad de sus estructuras internas:

Esto no implica una ausencia total de división de labores o de asignación de cargos, y evidentemente persisten tensiones y vicios organizativos del pasado, pero se ve una mayor preocupación por el mismo proceso de transformación social. El concepto zapatista de mandar obedeciendo reconoce que el movimiento es el proceso [...] mientras se buscan las transformaciones estructurales de largo plazo. [Stahler-Sholk, 2015, p. 12]

El Subcomandante Insurgente Moisés explicó en diferentes foros que el 12 de enero de 1994, cuando la sociedad civil mexicana e internacional

detuvo la guerra, les mandó el mensaje de que los querían vivos. Los zapatistas, que se habían preparado durante 10 años para la lucha armada, y que en los primeros comunicados afirmaban: “Somos los muertos de siempre, solo que ahora vamos a decidir cómo morir” (EZLN, 1994a), tenía que prepararse ahora para “vivir con dignidad”, pero “sin traicionar a sus muertos”. Así que se propusieron transformar no solo su movimiento militar en político-civil, sino su territorio y su universo de significados. Después de los 12 días de combate, el EZLN y el gobierno federal llevaron a cabo una mesa de diálogos en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, teniendo como mediador al obispo Samuel Ruiz, y firmaron una tregua de “cese al fuego”. Sin embargo, aunque los zapatistas ganaron mucha presencia simbólica y mediática para explicar su lucha, formas de organización y luego de convocar a los pueblos indígenas de todo el país a sumarse al movimiento desde sus trincheras, en el terreno las hostilidades continuaron.

Es así como surge la primera iniciativa política del EZLN para dialogar con la sociedad civil mexicana, antes de las elecciones presidenciales de 1994, denominada Convención Nacional Democrática, y la presentación del primer espacio geopolítico rebelde denominado “Aguascalientes” en agosto de 1994, en la comunidad de Guadalupe Tepeyac. A esta convocatoria llegaron más de 7 000 delegados de la sociedad civil, conformada por miembros de partidos, colectivos, organizaciones e individuos de izquierda de México y el mundo, no solo ocuparon los espacios zapatistas legitimando las demandas del EZLN, sino que se apropiaron del territorio rebelde impulsando proyectos de salud, educación y de observación de los derechos humanos.

El 19 de diciembre de 1994, frente al silencio e incumplimiento del gobierno mexicano de lo pactado en los Diálogos de San Cristóbal, y con la legitimidad que les otorgaba la sociedad civil, el EZLN y sus bases de apoyo optaron por la autonomía *de facto*, siguiendo con lo señalado en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, los insurgentes rompieron pacíficamente el cerco militar. Sin enfrentamiento alguno y sin el uso de las armas, los insurgentes y las bases de apoyo instalaron 38 municipios autónomos, permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus autoridades. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional explicó en un

comunicado cómo fue la campaña denominada Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indios.³

Las tropas zapatistas rompieron el cerco militar en la selva lacandona [...] protegidos por el terreno, el clima y el apoyo de la población, miles de combatientes lograron cruzar la línea del cerco militar, sin ninguna baja y sin haberse registrado choque alguno con las fuerzas federales, tomando posición en 38 municipios del estado de Chiapas... [Enlace Zapatista, 1994]

Este nuevo posicionamiento territorial fue considerado por el Ejército federal una afrenta, por lo que decidieron poner en marcha la estrategia contrainsurgente diseñada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en octubre de 1994, denominada “Plan de Campaña Chiapas 94”,⁴ con tres objetivos esenciales: “Romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley, ganar el apoyo de la población civil y destruir con las operaciones psicológicas la voluntad de combatir del EZLN” (Hidalgo, 2006, p. 28).

El 9 de febrero de 1995 el gobierno federal bajo el mandato de Ernesto Zedillo, rompió unilateralmente la tregua de cese al fuego y se hicieron públicas 18 órdenes de aprehensión en contra de supuestos dirigentes zapatistas por los delitos de sedición, motín, rebelión conspiración, terrorismo y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano (Rico, 1995), entre ellos Rafael Sebastián Guillén Vicente, a quien el procurador Lozano Gracia identificó como el S. I. Marcos.

Después de haberse referido a los dirigentes del EZLN como delincuentes comunes, la decisión oficial fue la de emprender acciones judiciales, por lo que el Ejército y la Seguridad Pública tenían la orden de internarse en la

³ Comunicado del CCRI-EZLN, 19 de diciembre (EZLN, 1994b).

⁴ Plan de Campaña Chiapas 94 del ejército, en una nota de pie: “1.- Suspensión de garantías individuales en la entidad: a) desplazamiento forzado de la población bajo la influencia zapatista hacia albergues o zonas de refugio oficiales; b) neutralización de la organización y actividades de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; c) captura y consignación de mexicanos identificados con el E.Z.L.N.; d) captura y expulsión de extranjeros perniciosos; [...] g) muerte o control de ganado equino y vacuno; h) destrucción de siembras y cosechas; i) empleo de la autodefensa civil [...] 1.- Romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley”. Consúltase el artículo de opinión de López y Rivas (2011).

selva para detener a la Comandancia General del EZLN. Esta ofensiva, claramente contrainsurgente, no solo utilizó mecanismos militares sino políticos, propagandísticos y psicológicos para ganar mentes y corazones y quitarle el agua al pez:

Políticamente, decía responder a un posible ataque del EZLN lo que justificaba la acción militar. Judicialmente, restablecer el Estado de derecho, dictando órdenes de aprehensión. En el plano ideológico-propagandístico, al quitarle el pasamontaña a “Marcos”, se buscaba acabar con un “símbolo” del movimiento rebelde. Militarmente, la entrada del Ejército Federal permitió a los soldados reconocer el terreno y posicionarse en el territorio.

Psicológicamente,⁵ todas estas acciones buscaban desmoralizar a las bases zapatistas, al crear un clima de tensión y aislar al EZLN de las bases de apoyo y de la sociedad civil [Rico, 1997, p. 44].

Las estrategias psicológicas pretenden “que el simpatizante experimente un sentimiento de impotencia y de futilidad ante la lucha, al hacerle creer que no tiene futuro” (Martín-Baró, 1990, p. 166). En este sentido, vale la pena analizar las tres fases de la campaña contrainsurgente realizada por el Ejército federal el 9 de febrero. (Rico, 1997)

La primera era militar, misión de cercos y destrucción dirigida a derrotar a la guerrilla.⁶ Lo importante era mostrar poderío extremo, desmoralizar a la población que apoyaba al grupo revolucionario. La segunda fase, se refería a la “acción cívica” con programas de pacificación, construcción de caminos, casas, reparto de despensas, labor social, con esta etapa se intenta conseguir la simpatía de la población. La tercera es el control de la población, con la táctica de

⁵ Constantemente, en las zonas militarizadas la guerra psicológica combina las dos tácticas anteriores: “Realiza actos de acción cívica, modalidad militar de la beneficencia pública, con operativos militares, trato comprensivo a las personas tras su aprisionamiento físico, ofertas dadas tras hostigamientos agotadores a los diversos grupos y sectores sociales” (Martín-Baró, 1990, p. 166).

⁶ *Demostración de fuerza*. Su finalidad es decepcionar, desesperanzar al enemigo con ataques rápidos, disparos al aire, vuelos rasantes, que muestren que no hay zonas seguras. Lo importante es desplegar fuerza para hacer sentir al enemigo que no tiene oportunidad (9 de febrero y ataques paramilitares).

“aldea estratégica”⁷ que incorporaba a la población civil a las tareas de autodefensa, promoviendo al ejército para su seguridad permanente y organizar grupos paramilitares entrenados y armados por el ejército. [p. 56]

Como se puede analizar, más que acabar con los insurgentes el objetivo de la contrainsurgencia era fragmentar el tejido social comunitario y armar grupos que vigilaran y controlaran a la población civil, y en especial a las bases de apoyo zapatistas. Los ataques rápidos, ejecutados por el Ejército federal, además de aprovechar el factor sorpresa, tenían el objetivo de decepcionar y desesperanzar a las familias zapatistas, demostrándoles que no había zonas seguras.⁸

Mientras la Secretaría de Gobernación informaba a la opinión pública que las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército federal se efectuaban conforme a derecho, en el foco de la contrainsurgencia el ejército incursionaba en el territorio rebelde destruyendo casas, deteniendo e interrogando a la población civil.

Tal como en 1994, volvió a cerrarse el cerco militar, para observadores, defensores de derechos humanos y periodistas. La única información disponible era la oficial, en forma de “partes de guerra”, y los testimonios de algunos pobladores que alcanzaban a salir de la zona de conflicto. En este sentido vale la pena recordar el suceso como lo relató don José, responsable comunitario de Nueva Estrella, comunidad tojolabal en 1995.

Primero llegaron las “guardias blancas” con paliacates rojos, ¡nos engañaron los cabrones! Y cuando ya estaban bien cerquita de nuestro retén que sacan

⁷ Aldea estratégica. Construyen nuevas comunidades o campamentos con el aparente objetivo de mejorar las comunidades política y económicamente, obligando a la población a aislarse de la guerrilla e incorporarse a las tareas de defensa de la seguridad pública e integrar grupos paramilitares de autodefensa civil. Esta técnica, utilizada después del 9 de febrero, ante el éxodo zapatista, permitió reubicar a los indígenas aliados del gobierno en las parcelas de los zapatistas. En 1997 los paramilitares expulsaron a los zapatistas y con el apoyo del ejército empezaron a construir sus bases progobierno.

⁸ La militarización de la región y la creciente acción paramilitar funcionó paralelamente a las mesas de diálogo realizadas en San Andrés Larráinzar, debilitando políticamente al EZLN e incentivando, desde instancias oficiales, enfrentamientos intercomunitarios, con la finalidad de que el Ejército federal tuviera el pretexto para desarmar a todas las partes en conflicto (Pérez et al., 2002, p. 44), incluyendo al EZLN.

las armas y a tirar. Le avisé a la gente, todos nos fuimos como estábamos, niños, y mujeres, algunos compas se quedaron a resistir. Que vamos a agarrar nuestras cosas o una cobija, un poco de pozol, eso es todo. Apenas alcanzamos a subir, cuando un chingo de tanques y soldados llegaron arrastrando los cadáveres de los compas [Rico, 1997].

En su relato, don José hace referencia al factor sorpresa del ataque y a los hombres de los poblados vecinos que fungieron como aliados-espías del ejército, para enseñar el camino, delatar a las familias zapatistas y distraer a los milicianos, haciéndoles creer que eran compañeros.

Frente a la entrada del ejército, la orden para las familias zapatistas fue replegarse en la selva y evitar en lo más posible los enfrentamientos. Tal es el caso de Yochib, bastión zapatista tseltal, donde se construyó una pista de aterrizaje y un cuartel militar que funcionó durante 15 años. Así recuerda Jtatic Manuel la llegada del ejército federal a su comunidad:

Llegaron tanques, aviones y soldados con metralletas buscando a los zapatistas, todas las bases de apoyo tuvieron que subir a la montaña a esconderse; los compañeros aguantaron días en el frío y la lluvia, no había comida. Los soldados quemaron las casas, mataron animales, destruyeron todo lo que pudieron [Manuel, entrevista realizada en 2015].

Ana María, autoridad autónoma, también recuerda cómo entró el ejército a Sibalja', su comunidad de origen, con tanquetas y helicópteros, "echando bala". A pesar de tener 10 años, ella y su primo de 12 años fueron los responsables de llevarse y "cuidar a los niños" en la montaña, mientras llegaban sus padres con algunas pertenencias.

"¡Nos traicionaron, vienen los ejércitos, están matando a todos!", gritaban en la comunidad. "Ya entraron a Nueva Estrella". Como mi papá era el responsable, me dijo: "Mi hija, vete a la montaña, lleva tus hermanitos, tus primos, que el Beto te ayude". Mi papá, mamá, recogieron una cobijita, uno su pozol, una nuestra ropita y subieron con nosotros [...] Claro que tenía miedo, estaba chiquita pues, como 10 años, se oían disparos, bombas, los helicópteros volaban. Los más chiquitos lloraban. [Ana María, entrevista realizada en 2015]

El testimonio de Ana María hace notar que los sucesos ocurridos en 1995 no fueron enfrentamientos entre soldados e insurgentes, sino ataques militares contra los civiles zapatistas, incluyendo a los niños. La mayoría de los pobladores de muchas comunidades de la selva permanecieron escondidos por más de un mes, antes de empezar a retornar a sus casas, pero muchos otros se quedaron escondidos hasta que se reanudó el diálogo en abril de 1995.

Los niños, niñas, mujeres y hombres no solo aguantaron la embestida de los soldados, sino que con el apoyo de las demás comunidades sobrevivieron y comenzaron a fortalecer espacial y políticamente su territorio con la construcción de cinco Aguascalientes, y dando una respuesta política a la destrucción del primer Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac llevada a cabo a la entrada del ejército. Los Aguascalientes fueron espacios políticos organizados para el diálogo y el encuentro del movimiento con simpatizantes de diferentes países. Estos espacios fueron ocupados por observadores de paz, nacionales e internacionales, colectivos de apoyo que llegaban con proyectos de salud, educación, productivos, posteriormente se convertirían en los denominados “Caracoles”.

A nivel mediático y simbólico, el EZLN impulsó iniciativas para romper el cerco militar, tales como la salida de la Comandanta Ramona hacia la Ciudad de México para ser delegada en la constitución del Congreso Nacional Indígena en octubre de 1996; posteriormente en 1997 salieron 1 111 delegados zapatistas representando a cada una de sus comunidades para denunciar y explicar sus demandas, dando pie a la Consulta Zapatista de 1999, cuando salieron 5 000 zapatistas a difundir su lucha en cada estado del país donde hubiera simpatizantes civiles, dispuestos a recibirlos, acompañarlos y darles seguridad. Sin olvidar la Caravana de 2001, en la que la Comandancia General del EZLN recorrió el país buscando la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena en el Congreso de la Unión.

Los desplazados, el rostro de la paramilitarización

Ante el fortalecimiento *de facto* del proceso autonómico zapatista, expresado territorial, simbólica y mediáticamente, el gobierno comenzó con la conformación de grupos paramilitares en la selva y los altos de Chiapas,

invitando a hombres de las comunidades que conocieran bien el territorio de la selva, a las familias zapatistas y que estuvieran dispuestos a matar a cambio de dinero, armas y drogas. La estrategia paramilitar no solo implica ataques militares, sino psicológicos, generando el terror en la población, resquebrajando el tejido social y los lazos familiares, esenciales para la conservación de la vida comunal. En este sentido, la guerra y la conquista territorial y ontológica tienen sus principios en la idea de raza y género, lo femenino empieza a ser visto como objetivo estratégico, los cuerpos de las mujeres son considerados territorios de guerra (Olivera, 2014).

Quizá el ataque paramilitar más conocido y analizado desde diferentes perspectivas y disciplinas por su desproporcionada crueldad hacia el cuerpo de las mujeres y niños/as durante el conflicto armado en Chiapas, es el ocurrido en Acteal en diciembre de 1997, en el que el grupo paramilitar “Máscara Roja masacró a 19 mujeres, 14 niñas, 4 niños, 8 hombres y 4 no nacidos” (Leyva, 2014, p. 368) y atacaron 14 comunidades tsotsiles de los Altos.

Desde la masacre de Acteal perpetrada por el grupo paramilitar Máscara Roja en 1997, la estrategia militar ha visto a los niños, niñas y mujeres zapatistas como parte de los adversarios a vencer. Para comprender esta afirmación, vale la pena recordar la consigna de los grupos paramilitares (Paz y Justicia, MIRA y Chinchulines) de las zonas con presencia rebelde: “¡Vamos a acabar con la semilla zapatista!”, consigna utilizada por Máscara Roja en Acteal en 1997.

Aunque la masacre de Acteal no fue dirigida hacia las familias zapatistas sino en contra de una organización civil aliada, denominada Las Abejas, respondió claramente a una táctica contrainsurgente en contra de las mujeres-madres organizadas, tal como lo señala Olivera (2014). “Además de la crueldad que significa para las mujeres presenciar la muerte de sus hijos o ver abrir el vientre de las embarazadas, la maternidad se ha usado simbólicamente como forma de aterrorizar a la población, junto con las amenazas de los asesinos de que hay que acabar con la semilla (p. 392).

En muchas comunidades las reuniones de mujeres comenzaron a ser sinónimo de rebeldía y de influencia zapatista, por lo tanto, se convirtieron en objetivo de los grupos paramilitares. Matando a las mujeres y a sus hijos se intenta destruir un símbolo de la resistencia, matar la semilla, y

con ella, las nuevas generaciones de adversarios. Las mujeres y los niños, como parte del movimiento indígena zapatista, representan la continuidad de la vida comunitaria, la organización indígena, por lo tanto, la continuidad de un esfuerzo de reivindicación de valores, cosmovisión y cultura “peligrosas” para el sistema.

Sin embargo, frente a la agresión directa la respuesta de las mujeres no fue la victimización, sino por el contrario, las mujeres-madres con sus niños en brazos, organizaron los primeros cinturones civiles a la entrada de sus comunidades para impedir el ingreso de los militares a sus territorios. En enero de 1998, mujeres de la organización civil Las Abejas y las mujeres zapatistas de Oventik y Polh’o se enfrentaron a soldados armados y a sus tanquetas para evitar que sus comunidades y campamentos de refugiados fueran militarizados.

Si nada más los hombres hubieran defendido se hubieran empeorado más, hubiera habido golpes, siempre los soldados no toman en cuenta a los hombres, hay más violencia, por eso primero entramos los niños y las mujeres y atrás iban apoyando los hombres. Tuvimos miedo, nos asustaron, algunas mujeres fueron con sus hijos abrazados, pero sí lo agarramos de su mano, sí pudimos correrlos... [Testimonio recuperado por Santiago, 2011, p. 361]

En este testimonio se expresa la importancia de que las mujeres-madres participen en las acciones políticas del movimiento, cada acción de esta índole representa un aprendizaje sobre los modos creativos en que las comunidades se defienden y construyen colectivamente sus prácticas de resistencia-rebelde. A diferencia de los desplazamientos forzados de 1995, después de la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 y el ataque a 14 comunidades, los cerca de 10 000 desplazados no tuvieron que buscar refugio en la montaña, sino que pudieron ser recibidos y protegidos por la organización rebelde, en Polh’o uno de los MAREZ, ubicado en los Altos de Chiapas

En contraste, con otros contextos, en donde los desplazados, frente a la violencia y la guerra, tienen que salir huyendo o buscar refugio en las ciudades, abandonando sus tierras, el EZLN y las bases de apoyo zapatista han construido en su territorio una estructura local para la resistencia-rebelde,

a través de espacios autónomos y redes locales, que permiten administrar su territorio y redes nacionales e internacionales que les permitieron construir un espacio para administrar las redes y ayudas solidarias frente al acoso político y militar. El Municipio Autónomo de Polh'ó se convirtió por varios años en un espacio seguro para los cerca de 14 000 desplazados y albergue de la solidaridad y las caravanas humanitarias.

A nivel nacional e internacional, el asesinato de los 45 niñas, niños, mujeres y hombres indígenas tsotsiles mientras oraban por la paz, no solo generó indignación, sino que provocó la solidaridad y el compromiso de muchos colectivos. El dolor compartido, más allá de provocar en los oyentes sentimiento de compasión, ofrecía la posibilidad de comprender la experiencia (Jimeno et al., 2015) de sentir con el otro y a través del otro. Pasando así del dolor subjetivo al dolor público y político.

El Municipio Autónomo de Polh'ó fue un espacio de socialización y educación rebelde, en el que no solo los zapatistas aprendieron a organizarse y resistir en colectivo, sino también las personas que llegaban, como observadores, en caravanas, comités de derechos humanos y como colectivos artísticos y políticos. En muchos casos, los visitantes pasaron de la curiosidad y ayuda solidaria, a un auténtico compromiso político con los desplazados.

Frente a esta estrategia de resistencia-rebelde global, la respuesta del Gobierno federal fue la de seguir fortaleciendo y posicionando en el territorio al ejército federal y a los grupos paramilitares, además de desalojar las Cabecezas Municipales (1998), así como expulsar a los observadores y colectivos internacionales acusándolos de ser "turistas revolucionarios", aplicando el artículo 133 constitucional, en el que se prohíbe las actividades políticas a los extranjeros. Desde 1998, el Municipio Autónomo donde se realizó la última parte de esta investigación ha sido objetivo geoestratégico de la contrainsurgencia expresado en el desalojo de la cabecera municipal de Taniperlas asentada en la región selva tseltal (1998), posteriormente en el 2003 el Gobierno federal mexicano decretó una orden de desalojo a 65 de las 110 comunidades de este municipio, por estar dentro de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA) desde la década de 1950. Esta situación, no solo provocó más tensión sino confrontaciones interétnicas, a raíz del reconocimiento gubernamental de que los únicos dueños de la Selva Lacandona eran

los pertenecientes a 66 familias mayas-caribes”, grupo indígena que se ha sumado a las tareas de autodefensa civil, aceptado proyectos de ecoturismo y de bioprospección auspiciados por el Estado y empresas trasnacionales como “Savia” y “Conservation International”, que ven a la REBIMA como un laboratorio viviente, para experimentar, patentar plantas medicinales y conocimientos tradicionales.

La muerte selectiva, emboscadas contra las autoridades

Entre 2003 y 2010 paramilitares de la Organización por la Defensa Indígena Campesina (OPDIC) y del Movimiento Indígena Revolucionario Ant Zapatista (MIRA) asesinaron a autoridades de Consejos Autónomos Zapatistas y atacaron cabeceras municipales, provocando el desplazamiento forzado de las comunidades. El asesinato de autoridades autónomas responde a una estrategia de violencia selectiva, en la que se elige a líderes morales, políticos y autoridades tradicionales para generar miedo y vulnerabilidad. Tal es el caso de violencia política experimentada por Manuela, mujer tseltal, y su familia:

Salimos como a las 10 de la noche de Viejo Velasco, había mucho lodo y frío, cargando con mis kerem y ach'ich pisil [niños y niñas, todos] amenazaron con matarnos pues, ¿cómo quedábamos? [...] Ya habían matado a mi Antonio [esposo]. Lo mataron los [paramilitares] de Nueva Palestina, lo mataron por ser zapatista. [Manuela, entrevista realizada en 2014]

Los paramilitares no solo asesinan y obligan al desplazamiento forzado de muchas comunidades, sino que generan un clima de terror e inseguridad constante, además de resquebrajar el tejido social comunitario e incluso romper los lazos familiares. Aunque la paramilitarización se muestra ante la opinión pública como “enfrentamientos intercomunitarios” independientes del Estado, la realidad es que la formación de grupos paramilitares es fomentada por el Ejército federal, reclutando a jóvenes y hombres adultos sin tierra, excluidos del proceso agrario y de las decisiones del ejido, a través de partidos

políticos, programas sociales y grupos armados ilegales en los que se les organiza bajo la premisa de la “autodefensa civil”.

La violencia y el dolor generado por los ataques paramilitares afecta la subjetividad de mujeres y niños, tal como se expresa en el testimonio de Manuela, quien, a más de 10 años del asesinato de su esposo, comisariado ejidal zapatista, todavía no logra comprender por qué los paramilitares lo mataron frente a su hijo de ocho años.

Eran como las 12 del día en el camino lo mataron, le dispararon [...] Petul, mi hijo, tenía como ocho años, iba con su papá y su abuelo, regresó llorando, todo lleno de sangre gritando: “¡Mataron a mi papá, lo mataron!”. Yo no sabía si era sangre de mi niño o de mi esposo [...] lo abraza, lo revisé, le pedí que se calmara, que me explicara qué le habían hecho a mi Antonio. [Manuela, entrevista realizada en 2014]

Los ataques paramilitares buscan infundir miedo a la población en dos sentidos: físico, con la eliminación pública de ciertas personas que son un referente moral dentro de la comunidad u organización; y psicológico, ya que se pretende paralizar a todos los que de alguna manera se identifiquen con las víctimas; de ahí que dejaran vivo a Petul, como un testigo del horror y del dolor provocado por la contrainsurgencia y para que su experiencia pudiese ser transmitida a su familia y su comunidad.

En las últimas décadas los ataques paramilitares, desalojos, desplazamientos forzados y militarización de las comunidades continuaron, pero se difundieron como conflictos interétnicos, intercomunitarios, tal como lo exigen los manuales de contrainsurgencia. Dichos actos de violencia y despojo no respondían en apariencia a la contrainsurgencia implementada por el Estado; sin embargo, la impunidad con que se actúa en estos casos y la protección que reciben estos grupos armados, ahora también coludidos con el narcotráfico por parte de las autoridades locales, demuestran claramente la complicidad del Estado. La guerra de contrainsurgencia, en este sentido, se convierte en un fenómeno multidimensional que tiene efectos sociales internos en las comunidades. Desde sus inicios, la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado en contra de las bases de apoyo zapatista ha tenido como eje transversal “romper el tejido social comunitario”,

profundizando las divisiones, tensiones y contradicciones propias de las comunidades expresadas por los medios de comunicación como “conflictos intercomunitarios”, entre organizaciones sociales (ARIC-UU, ARIC-ID, Xinich y “autónomos”), partidos políticos (PRI, PRD, PT y PVE) y grupos religiosos (católicos y protestantes), teniendo su máxima expresión en la formación de grupos paramilitares (Chinchulines, Paz y Justicia, Máscara Roja, MIRA), grupos armados extraoficiales que no solo matan, asesinan y violan a integrantes de las familias zapatistas, sino de cualquier extracción partidista que se oponga a los intereses del Estado y sus proyectos extractivistas.

Sin embargo, los ataques paramilitares, la militarización de las comunidades y los desalojos violentos de las cabeceras, contrario a debilitar la moral de los militantes, sin proponérselo han fortalecido la resistencia-rebelde ya que los y las zapatistas tuvieron que pensar en nuevas estrategias políticas y culturales para seguir fortaleciendo su organización, recuperar tierras para reubicar a sus desplazados y subsanar sus demandas de salud, educación de forma autónoma, construyendo un paisaje de rebeldía en su territorio. A nivel municipal se construyeron las clínicas, centros de capacitación y formación de promotores de educación, salud, medios de comunicación, agroecología y cooperativas regionales que pudieran subsanar las necesidades de las comunidades. En el ámbito político institucional rebelde se instituyeron las Cabeceras Municipales, Comisariados Ejidales y Caracoles, nombre que se les dio a las cinco sedes de las “Juntas de Buen Gobierno” ubicadas regionalmente.

Los espacios autónomos se desarrollaron durante décadas como instancias de organización civil conformadas tanto por bases de apoyo zapatistas como por campesinos e indígenas afiliados a organizaciones sociales cercanas ideológicamente con el zapatismo. Estas sedes constituyeron un espacio privilegiado de resistencia, dando sentido a la vida comunitaria y desplegando en estas “relaciones sociales no capitalistas, de producción y reproducción de vida nacidas de la resistencia al modelo neoliberal, que instauran nuevas territorialidades en base a la reconfiguración de las viejas”. (Zibechi, 2006, p. 128), incluso reconfigurando su proceso autonómico para hacer frente a las vicisitudes actuales. Muestra de esto es que el subcomandante insurgente Moisés explicó en el comunicado de noviembre de 2023 (Enlace Zapatista, 2023) que para hacer frente a las guerras militares y por

los recursos naturales, se tendría que hacer un ajuste en la organización territorial de la organización. En cada comunidad zapatista se constituyó un Gobierno Autónomo Local (GAL) coordinado por agentes y comisariados autónomos elegidos en asamblea. Cada GAL dará solución a las demandas de salud, educación y justicia y a la vez dará respuesta inmediata a cualquier situación de emergencia. Los responsables comunitarios del GAL además deberán de generar las condiciones para hacer alianzas y organizarse con grupos y personas cercanas a organizaciones sociales, colectivos o partidos políticos, pero que estén dispuestas a trabajar en común, terrenos en colectivo. Para procesos más amplios como capacitaciones de educación, salud, agroecología, derechos humanos, medios de comunicación, campañas de vacunación y decisiones políticas que afecten a toda la organización, los GAL se reunirán en regiones (Juntas de Buen Gobierno) o zonas (Municipios) para tomar decisiones colectivas.

Reflexiones finales

La revisión de la triada territorio-contrainsurgencia-resistencia, desde la microhistoria y la vida cotidiana de los sujetos, permitió visualizar algunas técnicas y posicionamientos ideológicos-militares que se enfrentan entre el EZLN y el gobierno en Chiapas en el campo. Aunque en apariencia existe una tregua (1994) y los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996, establecieron el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la necesidad de ampliar su participación y representación política en la Ley de Cultura Indígena, el aislamiento territorial y mediático del movimiento zapatista y su proceso autonómico sigue siendo atacado por políticas de contrainsurgencia y de olvido.

Con el acelerado ritmo de las “reformas” neoliberales y un conflicto armado irresuelto, se ha incrementado la violencia ejercida por la combinación de los gobiernos locales, crimen organizado y empresas trasnacionales, actores que, además de contener la organización comunitaria, buscan controlar el territorio con la militarización y paramilitarización de la zona zapatista y no zapatista, generando el desplazamiento forzado de cientos de comunidades indígenas.

Esa multiplicación de conflictos violentos, a veces disfrazados de “intracomunales” o de “guerra contra el narcotráfico”, tiene el propósito de legitimar la intervención militar ante la opinión pública, para obtener recursos naturales y territorios para el servicio de las trasnacionales, a través de convenios, propuestas económicas, extorsiones y amenazas que buscan disuadir a las comunidades de vender sus tierras, y si esto no resulta, se hace uso de estrategias de guerra, como la desaparición forzada de activistas y la conformación de grupos paramilitares, ahora también reclutados y revitalizados por los grupos delincuenciales, el narcotráfico y las trasnacionales mineras. Actualmente hay cerca de 20 000 desplazados en Chenalh’o, Altos de Chiapas, en Tila zona norte, en Chicomuselo frontera con Guatemala con el apoyo, la omisión o la complicidad de los gobiernos locales.

En este contexto de violencia y neocolonización generalizada en todo el país es importante seguir analizando y aprendiendo de experiencias como la zapatista, siendo un caso paradigmático de resistencia y organización situada en un territorio que no solo les ha permitido sobrevivir a la colonización, la guerra y la contrainsurgencia por más de 40 años, sino re-existir en otro mundo posible. El EZLN y las bases de apoyo zapatistas, además de proteger, defender y administrar su territorio, han realizado diferentes iniciativas políticas, culturales, sociales y económicas para construir una estructura local de resistencia-rebelde a través de espacios autónomos, redes locales y globales que apoyan la construcción de proyectos de salud, derechos humanos, agroecología, comercio justo y de educación, entre otros. Frente a la muerte y el acoso político, militar, económico y psicológico las mujeres, niños/as y hombres zapatistas apuestan por la vida, y por su derecho a seguir existiendo como pueblo indígena.

Referencias

- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (2022). Plan Chiapas 1994. Estrategia contrainsurgente de la Sedena. Consultado en <https://frayba.org.mx/conoce-el-plan-de-campana-chiapas-94-0>.
- Dussel, E. (2007). *Política de la liberación. Historia mundial y crítica*. Madrid: Trotta.

- Enlace Zapatista (1994, 19 de diciembre). Creación de municipios Autónomos. Archivo histórico. Consultado el 17 de febrero de 2025 en <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/12/19/creacion-de-municipios-autonomos/>.
- (2023, 20 de diciembre) Vigésima y última parte: El común y la no propiedad. Archivo histórico. Enlace Zapatista. Consultado el 1 de enero de 2024 en <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/comunicado/>.
- EZLN (1994a, 1 de enero). Primera Declaración de la Selva Lacandona. Enlace Zapatista. Consultado el 2 de octubre de 2011 en <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-lacandona/>.
- (1994b, 19 de diciembre). Creación de Municipios Autónomos. Enlace Zapatista. Consultado el 21 de marzo de 2023 en <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/12/19/creacion-de-municipios-autonomos/19>.
- Fernández, A. M. (2008). *Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades*. Buenos Aires: Biblos.
- Foucault, M. (1999). *Estrategias de poder. Obras esenciales*, (vol. 2). Barcelona: Paidós Ibérica.
- García, M. (2002). *Foucault y el poder*. México: UAM-Xochimilco.
- Hidalgo, O. (2006). *Tras los pasos de una guerra inconclusa (doce años de militarización en Chiapas)*. San Cristóbal de las Casas: CIEPAC.
- Jimeno, M., Varela, D., y Castillo, Á. (2015). *Después de la masacre: emociones y política en el Cauca indio*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Centro de Estudios Sociales/Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Leyva, X. (2014). De luchas autonómicas y epistémicas en tiempos de crisis y guerras múltiples. En F. Escárzaga, R. Gutiérrez, J. Carrillo, E. Capece y B. Nehe (coords.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y transformación social* (vol. III, pp. 363-386). México: UAM-Xochimilco / BUAP / CIESAS.
- Leyva, X., y Ascencio, G. (1996). *Lacandonia al filo del agua*. México: FCE.
- López y Rivas, G. (2011, 4 de febrero). El plan de campaña de 1994 en contra del EZLN. *La Jornada*. Consultado el 3 de enero de 2024 en <http://www.jornada.unam.mx/2011/02/04/opinion/025a1pol>.
- Maldonado, B. (2002). *Los indios en las aulas. Dinámica de dominación y resistencia en Oaxaca*. México: Conaculta / INAH.
- Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 127-167). Bogotá: Siglo del Hombre Editores / Universidad Central / Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos / Pontificia Universidad Javeriana / Instituto Pensar.
- Martín-Baró, I. (1990). De la guerra sucia a la guerra psicológica: el caso de El Salvador. En I. Martín-Baró (ed.), *Psicología social de la guerra: trauma y terapia* (vol. 4, pp. 159-153). San Salvador: UCA Editores.

- Mondragón, H., (2007). *La estrategia del imperio. Todo para el capital transnacional*, Colombia: Ediciones Ántropos.
- Olivera, M. (2014). La dimensión de género en las situaciones de guerra y las rebeldías de las mujeres en México y Centroamérica. En F. Escárzaga, R. Gutiérrez, J. Carrillo, E. Capece y B. Nehe (coords.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y transformación social* (vol. III, pp. 387-410). México: UAM-Xochimilco / BUAP / CIESAS.
- Pérez, S., Santiago, C., y Álvarez, R. (2002). *Ahora apuestan al cansancio... Chiapas: fundamentos psicológicos de una guerra contemporánea*. México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez/Grupo de Acción Comunitaria.
- Quijano, A. (2007). Colonialidad del poder y clasificación social. En S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 93-126). Bogotá: Siglo del Hombre Editores / Universidad Central / Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos / Pontificia Universidad Javeriana / Instituto Pensar.
- Rico, A. (1995, 9 de febrero). El presidente mexicano califica de terroristas a los dirigentes zapatistas y ordena su captura. *El País*. Consultado el 11 de agosto de 2022 en https://elpais.com/diario/1995/02/10/internacional/792370818_850215.html.
- (1997). Los medios como mecanismos de guerra de baja intensidad en el conflicto armado en Chiapas (tesis de licenciatura). México: Universidad de la Comunicación.
- (2007). Niñas y niños tseltales en territorio zapatista. Resistencia, autonomía y guerra de baja intensidad (tesis de maestría). México: UAM-Xochimilco.
- (2018). Infancias y maternidades zapatistas: subjetividades políticas emergentes en las prácticas educativas y de resistencia-rebelde frente a la contrainsurgencia en Chiapas (tesis de doctorado). Xalapa: Universidad Veracruzana.
- Rozental, E. (2014). Colombia, minga de los pueblos. Conciencia, resistencia y plan de vida. En F. Escárzaga, R. Gutiérrez, J. Carrillo, E. Capece y B. Nehe (coords.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y transformación social* (vol. III, pp. 159-178). México: UAM-Xochimilco / BUAP / CIESAS.
- Rus, J. (2012). *El ocaso de las fincas y la transformación de la sociedad indígena de los Altos de Chiapas, 1974-2009*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas / Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.
- Santiago, C. (2011). Chiapas, años de guerra, años de resistencia. Mirada psicosocial en un contexto de guerra integral de desgaste. En B. Baronnet, M. Mora y R. Stahler-Sholk (coords.), *Luchas "muy otras". Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas* (pp. 341-370). México: UAM-Xochimilco / CIESAS / UNACH.
- Scott, J. C. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Era / Yale UP.
- Stahler-Sholk, R. (2015). Sustentabilidad, resistencia y otra forma de hacer política: reflexiones a partir del zapatismo. En M. A. Gracia (coord.), *Trabajo, reciprocidad y re-producción de la vida. Experiencias colectivas de autogestión y economía solidaria en América Latina* (pp. 317-340). Buenos Aires: Conacyt / Ecosur / Miño y Dávila.
- Toledo, S. (2002). *Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas*. México: UNAM-Proimm-se / Unach-IEI.

- Walsh, C. (2006). (De)Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador. En N. Fuller (ed.), *Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades* (pp. 115-142). Lima: Red de Apoyo de las Ciencias Sociales.
- Zibechi, R. (2006). La emancipación como producción de vínculos. En A. Ceceña (coord.), *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado* (pp. 123-149). Buenos Aires: Clacso